



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA CIVIL

Medellín, veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2.023)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Ref. Exp.: 05001 31 03 012 2020 00340 01

Proceso: Divisorio.
Demandante: MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ GALLO (C.C. 30'318.513).
Demandados: RAFAEL IGNACIO LÓPEZ ACOSTA (C.C. 71'717.920) y otros.
Extracto: No se configura la nulidad invocada en la medida que la notificación censurada se aviene al ordenamiento. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el codemandado RAFAEL IGNACIO LÓPEZ ACOSTA, contra el auto del nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ GALLO incoo demanda de División por Venta respecto a bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 001-274118, en contra de, entre otros el hoy recurrente RAFAEL IGNACIO LÓPEZ ACOSTA¹, trámite en el que por auto del 20 de febrero de 2.023 se decretó lo deprecado².

¹ También se demandó a LUIS BERNARDO RESTREPO VÉLEZ, FERNANDO PARRA GAVIRIA, YELSIN RENDÓN VARGAS, SONIA INÉS RODRÍGUEZ BAENA, MARTHA LUZ BAENA RÍOS, LUISA FERNANDA BOTERO VELÁSQUEZ, HAROLD NOLAN ÁLVAREZ QUINTERO, DAVID ANTONIO GARCÍA GIRALDO, RAMÓN ANTONIO RAIGOZA RAMÍREZ, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), OSCAR DARÍO CARMONA GALLEGO, MARTHA INÉS MUÑOZ NARANJO, SANTIAGO MUÑOZ, JANNETH VELOZA ROBAYO, FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA - PATRIMONIO AUTÓNOMO -, INVERSIONES BALIN S. A. y ANA MARÍA VARGAS GÓMEZ.

² Archivo 70 cuaderno de la primera instancia.

Del pedido de nulidad:

El 21 de abril hogaño el hoy recurrente alegando indebida notificación, solicitó la nulidad de todo lo actuado, sosteniendo que apenas se enteró de este proceso cuando la actora le informó de la orden para vender el bien³, argumentando que la Ley 2213 de 2.022, vigente para la fecha en que presuntamente se le notificó, trae las reglas para el enteramiento electrónico, las que critica en cuanto a él corresponde.

Para el efecto indicó que la demandante conoce que su domicilio está en la *“carrera 23 No. 36A Sur 95, interior 95, del municipio de Envigado Antioquia”*, la que corresponde con la dirección del inmueble objeto de la división, pues en este sitio está realizando mejoras, que a propósito, tiene derecho a reclamar; igualmente, que puede ser enterado a través del correo *“rafaindian81@gmail.com”*, y no en *“rlopez@eafit.edu.co”*, el que dijo dejó de utilizar desde el año anterior.

Resaltó que tiene un papel trascendental como impulsor de la construcción del edificio, de hecho, ha obtenido el licenciamiento, sus prórrogas y refrendación, es de ahí que deriva el pacto de indivisión (art. 1374 del C.C.), por lo que en los términos del artículo 409 del C. G. del P., era del caso programar audiencia para decidir, además interrogaría al perito que avaluó la propiedad en \$11.178'957.500.00, con lo que dijo no estar de acuerdo, sumado a que desconoce las mejoras que plantó.

Expuso que fue ausente el control de legalidad, pues incluso el codemandado SANTIAGO MUÑOZ MEJIA falleció, punto que debió considerarse para la interrupción del proceso (art. 159 procesal civil), aunado a que existen acreedores hipotecarios.

Por lo anterior y apoyándose en los artículos 29 Constitucional, 132 y 133 del C. G. del P., deprecó la nulidad de todo lo actuado.

³ Archivo 76 ídem.

Del trámite y decisión de primera instancia:

En auto del 25 de abril de 2.023 se corrió traslado⁴ de la nulidad, a lo que la parte actora se opuso manifestando, en síntesis, que el único correo que conoce del recurrente es en el que hizo la notificación (rlopez@eafit.edu.co), el que también tiene registrado como persona natural en la Cámara de Comercio de Medellín, según el correspondiente certificado mercantil, aunado a que tal dirección electrónica el interesado la utiliza ante el mismo Juzgado pero en otro proceso (radicado 2022-00357), por lo que el solicitante de la nulidad no actúa con lealtad⁵.

A través de la decisión recurrida se negó la nulidad⁶, concluyendo el *a quo* que la diligencia de notificación personal en cuestión se efectuó correctamente a través de empresa de correo certificado, tal como consta en el “*archivo 57*”, de lo que existe constancia de recibido.

Agregó que en el certificado de matrícula mercantil de LÓPEZ ACOSTA expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, aparece como dirección de notificaciones el correo electrónico “*rlopez@eafit.edu.co*”, a lo que se suma la prueba sobre los mensajes enviados y contestados desde dicha dirección.

En cuanto a la interrupción del proceso, no es cierto lo del deceso de un comunero, lo que se aclara con la lectura de la Escritura Pública 512 del 24 de marzo de 2.022 de la Notaría Segunda de Medellín, la cual consta en el “*archivo 83*”; además, en este asunto no se debe citar a los acreedores hipotecarios, quienes cuentan con procedimientos ejecutivos en pro de sus intereses (arts. 462 y 467 del C. G. del P.).

Así negó la nulidad, condenando en costas al peticionario.

⁴ Archivo 80 de igual cuaderno.

⁵ Archivos 84 y 85 ídem.

⁶ Archivo 86 cuaderno de la primera instancia.

Recursos y solución a la reposición:

Frente a tal decisión LÓPEZ ACOSTA presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación⁷, explicando que lo referente a la interrupción del proceso y la existencia de acreedores hipotecarios, no estaba orientado a reforzar su pedido de nulidad, sino, que eran situaciones que ameritaban contextualizarse.

Sobre la negación de la nulidad indicó:

- 1) Que desconoce el “*archivo 57*” aducido por el *a quo*, pues no se le ha compartido el acceso al expediente digital, sumado a que no se explicó cómo se le notificó, simplemente se señaló que existe una constancia de recibido, la que tampoco conoce, y menos si el Juzgado verificó el mensaje que se dice fue enviado, y si este cumplió con lo exigido por la Ley para un correcto enteramiento, de ahí que pidió revisar lo pertinente.
- 2) Insistió que la demandante utilizó un correo electrónico que no utilizaba, lo que era del conocimiento de la actora, cobrando relevancia ya que; “... *no encuentra el correo electrónico que se dice fue utilizado para notificarlo ...*”, y tampoco existe correo electrónico proveniente de la empresa “*Servientrega*” o de la demandante, notificándole personalmente sobre la admisión de la demanda.
- 3) En cuanto a su registro mercantil, que desde el 2.019 no lo renueva, por lo que la información que ahí reposa no está actualizada; y, sobre los presuntos “*emails enviados y contestados*”, si bien aún no los conoce, pues insistió en que no tiene acceso al expediente, que para los días de la notificación no usaba el correo “*rlopez@eafit.edu.co*”.

⁷ Archivo 87 de igual cuaderno.

- 4) Finalizó cuestionando la condena en costas, pues de estas nada se dijo en las consideraciones de la providencia que recurre, sin que ello sea automático, debiendo existir prueba de su causación. Solicitó exonerarlo de ese pago o disminuir la tasación.

En traslado, la actora adujo que el recurrente no aportó pruebas sobre lo que afirma, y que de él sólo conoce el correo donde fue notificado⁸.

En providencia del 26 de julio de 2.023 se decidió no reponer, tras considerarse que si bien LÓPEZ ACOSTA no ha solicitado el acceso al expediente digital, tampoco allegó prueba sobre el desuso o desactivación del correo electrónico rlopez@eafit.edu.co; al contrario, se acreditó que él intercambiaba correos electrónicos con la demandante, además de lo otrora indicado sobre la información consignada en su certificado mercantil.

Sobre las costas, que el artículo 365.1 del C. G. del P. indica que se condenará a quien se le resuelva desfavorablemente una solicitud de nulidad, tal como aquí ocurrió, y lo fijado fue dentro del rango establecido por el Acuerdo que para el efecto estableció el Consejo Superior de la Judicatura.

Concedida la alzada y al verificarse que estamos ante providencia apelable (artículo 321.6 del C. G. del P.), se procede a resolver de plano el recurso, tal como lo prevé el artículo 326 ídem, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, todo dentro del marco del principio de la limitación previsto en el artículo 328 procesal civil.

⁸ Archivo 89 del cuaderno de la primera instancia.

Sobre las nulidades, la doctrina ha dicho que son irregularidades que se presentan en el marco de un trámite, y que según su gravedad invalidan las actuaciones surtidas, de ahí que declarándolas se controla la validez de la actuación y se asegura el derecho constitucional al debido proceso⁹, aunque sus causales son taxativas -únicamente las previstas en la ley-¹⁰, y la oportunidad de alegarlas es “... *en cualquiera de las instancias antes de que se dicten sentencia o con posteridad a ésta, si ocurrieren en ella.*” (art. 134 C. G. del P.).

El recurrente cuestiona las gestiones que para notificarlo hizo la parte actora, por lo que nos circunscribimos al numeral 8° del artículo 133 procesal civil, el que reza:

“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (...)”.

Valga anotar que la notificación protege las garantías ciudadanas, comprendiendo tal acto de comunicación el mismo debido proceso, de lo que la Corte Constitucional ha referido:

“(...) la debida notificación es un ejercicio judicial que se deriva del respeto al principio de publicidad. Este principio, como lo definió la sentencia C-980 de 2010, tiene la finalidad de garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación judicial, de tal manera que asegure a las partes el ejercicio pleno del derecho de defensa, contradicción e impugnación. Desde ese punto de vista, entonces, la notificación, más que pretender formalizar la comunicación del inicio y desarrollo de una determinada actuación, lo que busca es legitimar las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y proteger las garantías procesales intrínsecamente relacionadas con el derecho a la defensa”. Sentencia T 397 de 2.015.

“La notificación judicial constituye un elemento básico del derecho fundamental al debido proceso, pues a través de dicho acto, sus destinatarios tienen la

⁹ Corte Constitucional, sentencia T 125 de 2010, reiterado en el Auto 159 de 2.018.

¹⁰ Sobre el punto, la doctrina ha dicho: “... *La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso*”. (Corte Constitucional, Sentencia T-125/10).

posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer su derecho de defensa.”. Sentencia T 025 de 2.018.

El artículo 290 del C. G. del P., en su parte pertinente dispone:

“Deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: 1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo...”, subrayado adrede.

Para el efecto la Ley 2213 de 2.022 autoriza la utilización de “canales digitales”, tal como en este caso lo hizo la demandante, por lo que es del caso estudiar cuáles son las exigencias de la práctica de la notificación virtual, de lo que la Sala Civil de la Corte Suprema, explicó:

“[E]s menester recordar que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha definido que en tratándose de la notificación personal, a partir de la expedición del Decreto 806 de 2020, replicado en la Ley 2213 de 2022, la parte interesada en practicar dicho medio de enteramiento procesal, «tiene dos posibilidades (...). La primera, notificar a través de correo electrónico, como lo prevé el canon 8° de ese compendio normativo. Y, la segunda, hacerlo de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. Dependiendo de cuál opción escoja, deberá ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma» (CSJ STC7684-2021, 24 jun., rad. 00275-01).

“(...). En reciente pronunciamiento, además de afianzar la posibilidad de opción que tienen los sujetos procesales para realizar la notificación personal, la Sala se pronunció sobre los canales de notificación y otros aspectos atinentes a la notificación virtual, refiriendo sobre las exigencias jurídicas para su realización y demostración probatoria, que:

“(...) i). En primera medida -y con implícitas consecuencias penales- exigió al interesado en la notificación afirmar «bajo la gravedad de juramento (...) que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar»; además, para evitar posibles discusiones, consagró que ese juramento «se entenderá prestado con la petición» respectiva.

“ii). En segundo lugar, requirió la declaración de la parte tendiente a explicar la manera en la que obtuvo o conoció del canal digital designado.

“iii). Como si las dos anteriores no resultaran suficientes, impuso al interesado el deber de probar las circunstancias descritas, «particularmente», con las «comunicaciones remitidas a la persona por notificar».

“De lo expuesto, no queda duda que las partes tienen la libertad de escoger los canales digitales por los cuales se comunicarán las decisiones adoptadas en la disputa, sea cual sea el medio, siempre que se acrediten los requisitos legales en comento, esto es, la explicación de la forma en la que se obtuvo -bajo juramento, por disposición legal- y la prueba de esas manifestaciones a través de las «comunicaciones remitidas a la persona por notificar».

“Tampoco hay vacilación al indicar que esa elección, al menos en la etapa inicial del proceso, compete al demandante quien debe demostrar la idoneidad del medio escogido, sin perjuicio de que se modifique en el curso del proceso, conforme lo permiten los numerales 5° de los artículos 78 y 96 del Código General del Proceso y el canon 3° de la Ley 2213 de 2022.

“(…) Ahora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo –que no es otra cosa que la constatación de que la misiva llegó a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria, bien sea en el trámite de nulidad o por fuera de él. (...)» (CSJ 16733-2022, 14 dic., rad. 00389-01). Comillas y cursivas en el texto original, corchete fuera de él. STC4737-2023.

En conclusión, es necesario que se afirme que la dirección electrónica suministrada: 1) *“corresponde al utilizado por la persona a notificar”*; 2) debe explicarse cómo se obtuvo ese canal digital; y, 3) finalmente, *“acreditar el acuse de recibo”*.

En el caso en estudio una vez admitida la demanda¹¹ la parte actora inició las gestiones para notificar a los demandados, entre ellos al hoy recurrente, de lo que hubo dos (2) intentos bajo la modalidad *“virtual”* con resultados positivos¹²; sin embargo, en un temprano y adecuado control de legalidad, el *a quo* dejó de considerarlas¹³. En providencia del 31 de agosto de 2.022, refiriéndose a la notificación de LÓPEZ ACOSTA expresó:

“(…). En cuanto a los señores RAFAEL IGNACIO LOPEZ ACOSTA, JANNETH VELOZA ROBAYO Y ANA MARIA VARGAS GÓMEZ no es posible tener en cuenta dicha notificación por cuanto no cumple con los requisitos exigidos en el Art. 8 del Decreto 2213 de 2022, en el sentido de que no fue informada previamente la dirección electrónica, no indica la forma de cómo la obtuvo ni allega las evidencias correspondientes. (...)”. Subraya adrede.

El 27 de septiembre de 2.022, tratando de subsanar lo anterior, la parte actora bajo juramento informó que el correo electrónico del codemandado LÓPEZ ACOSTA es *“rlopez@eafit.edu.co”*, y acerca de cómo lo consiguió afirmó que lo obtuvo de su certificado de existencia y

¹¹ Archivo 14 cuaderno de la primera instancia.

¹² Folio 7 del archivo 37 y folios 2-3 del archivo 42 de igual cuaderno.

¹³ Archivos 45 y 50 cuaderno de la primera instancia.

representación legal¹⁴, lo cual reforzó arrimando el pantallazo de correos enviados entre sí desde esa dirección¹⁵.

Seguidamente, el 10 de octubre de 2.022 la parte actora acreditó el enteramiento que realizó el día 7 de ese mes y año en tal correo (rlopez@eafit.edu.co), de lo que aportó acuse de recibo dimanado de empresa de correo certificado¹⁶.

Tales actuaciones satisfacen lo exigido por la norma que para tal propósito acogió la demandante, sin lo que lo argüido por el recurrente genere un decaimiento al enteramiento, pues, en primer lugar, en cuanto al contenido del mensaje, se identificaron todos los datos del proceso (especie, radicado y partes), así como la autoridad judicial que lo conoce y la fecha de la providencia de admisión, adjuntándose esta última, la demanda, anexos, inadmisión y memorial subsanando.

El que no se conozca el expediente digital no ocasiona error en el trámite de notificación, pues ello no es atribuible a la demandante; contrariamente, demuestra falta de diligencia del hoy recurrente, que aun conociendo de la existencia del pleito en el que es parte, no ha solicitado el acceso al mismo.

Otro argumento del recurrente es que desde 2019 no ha renovado la matrícula mercantil, por lo que los datos que tiene registrados en la Cámara de Comercio están desactualizados. Al respecto, según el artículo 33 del C. Co.¹⁷, la matrícula se renovará anualmente informando cualquier cambio o la pérdida de la calidad de comerciante, donde si lo

¹⁴ “Bajo la gravedad del juramento, declaro que la dirección electrónica corresponde al utilizado por la persona a notificar, el cual fue obtenido del certificado de existencia y representación legal, pagina 2 de su actividad económica, obtenida con la compra de dicho certificado el cual anexo.”. Folio 2 archivo 42 de igual cuaderno.

¹⁵ Folio 2 del archivo 55.

¹⁶ Folios 3-5 del archivo 57 ídem.

¹⁷ “ARTÍCULO 33. <RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL - TÉRMINO PARA SOLICITARLA>. La matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro.”.

mismo es una obligación legal incumplida, no es excusa para desconocer la notificación cuestionada.

En relación a las costas, lo mismo se aviene a lo previsto en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 365 del C. G. del P. cuando deja en claro que; *“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable... una solicitud de nulidad”*, y en cuanto al monto agencias en derecho, el artículo 366.5 deja en claro que *“... solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas...”*, sin que este sea el momento procesal para estudiar tal cuantificación.

Por todo lo anterior la decisión atacada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO